**"COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LOS ACTOS
DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE
INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN LA REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA"**

363ª LEGISLATURA

**Acta de la sesión 25ª, especial, celebrada en miércoles 17 de agosto de
2016**

SUMARIO.

Continuación de la discusión y votación de las Conclusiones y Propuestas que se incluirán en el Informe respectivo.

Se abre la sesión a las 18:00 horas.

ASISTENCIA

Preside accidentalmente el diputado señor Ignacio Urrutia.

Asisten la diputada señora Clemira Pacheco y los diputados señores Lautaro Carmona, Bernardo Berger, Fuad Chahin, Fernando Meza, Jorge Rathgeb y Joaquín Tuma.

Actúa como Secretario el abogado señor Sergio Malagamba Stiglich y como abogado ayudante el señor Mauricio Vicencio Bustamante.

CUENTA

Reemplazo del diputado Germán Becker por el señor Bernardo Berger.

ACUERDOS

1.- Incluir como anexo de la presente acta la propuesta de conclusiones que la diputada señora Clemira Pacheco presentó a nombre de la Bancada del Partido Socialista de Chile, documento que se encuentra disponible en la siguiente dirección:

<https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=80726&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION>

ORDEN DEL DÍA

Continuación de la discusión y votación de las Conclusiones y Propuestas que se incluirán en el Informe respectivo.

b) Referidas a la persecución y sanción de los hechos de violencia. Como señalamos, la solución del conflicto pasa por una acción integral, que importe el dialogo fraterno y sincero entre protagonistas relevantes de la Región; pero de ninguna manera se puede dejar de lado la persecución de hechos que importen una transgresión del marco legal y la afectación de bienes jurídicos de diversa relevancia. Es evidente que no todo hecho de violencia puede ser calificado a priori de terrorismo, pero bien podrían algunos hechos ocurridos en la región ser catalogados como tales, accediendo a las especiales herramientas procesales que flanquea la ley N° 18.314. Y si bien la calificación, en definitiva, la realizan los tribunales de justicia, le asiste a la autoridad política y a los órganos persecutores la posibilidad de calificar determinadas conductas como potencialmente constitutivas de terrorismo; y, en efecto, así ha ocurrido en diversas ocasiones en los últimos años donde las autoridades políticas han deducido querellas de esta naturaleza.

Igualmente, la persecución penal por este régimen, o el general, ha presentado ciertas deficiencias que han sido advertidas, particularmente por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por lo anterior, se proponen los siguientes cambios con miras a perseguir y sancionar de manera eficaz los hechos de violencia:

i. Modificaciones a la ley N° 18.314, que Determina Conductas Terroristas y Fija su Penalidad.

De los antecedentes allegados a esta comisión, queda en evidencia la dificultad que tiene el Ministerio Público y los querellantes para obtener condenas por delitos terroristas con posterioridad a las reformas del año 2010. Las falencias de esta legislación son de fácil detección, y a ellas se refirieron diversos invitados a la comisión. Ellas se refieren a:

El diputado señor Carmona se manifestó en disconformidad con el presente punto, dado que consideró que se trata de un tema sensible para las distintas comunidades indígenas de la zona, toda vez que se estaría estableciendo un prejuicio sobre algunos miembros de ellas.

-Puestos en votación la letra b) y el punto i fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (5x0), señores Berger, Meza, Rathgeb, Tuma y Urrutia, don Ignacio.

1) Imposibilidad de acreditar en juicio el dolo terrorista y la subjetividad del tipo penal: Las legislaciones que sancionan el terrorismo se han enfrentado al dilema de hacerlo poniendo acentos en los aspectos objetivos del hecho, o a las intenciones o fines perseguidos. Nuestro marco

legal ha variado sustancialmente, desde presunciones hasta el tipo penal subjetivo que se encuentra en vigencia y que ha redundado en causas fallidas o inutilización del propio texto legal. Con las reformas introducidas a la ley N° 18.314 en los últimos años, se eliminó cualquier vestigio de objetividad y se exige que el hecho se hubiese realizado con el objeto de producir en la población, o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie; lo que terminó por minar la eficacia de esta norma.

Con la actual normativa pasan a un segundo plano los medios empleados o el temor efectivo producido en la población o en una parte de ella; lo que configura un actuar típico, antijurídico y culpable, lo que requiere, a su vez, sumergirse en el fuero íntimo del sujeto activo. Por lo mismo, y si queremos contar con una herramienta para sancionar conductas de especial gravedad y que atenten contra la seguridad del Estado, debemos introducir reformas legales en este sentido y modificar el tipo penal.

-Puesto en votación el numeral 1) fue aprobado por la misma votación.

2) Perfeccionar y morigerar el estándar probatorio del testigo protegido. *El régimen especial de protección de testigos de la ley N° 18.314 permite adoptar medidas especiales, si se estimare que existe un riesgo cierto para la vida e integridad física del testigo o perito, como, asimismo, de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallaren ligados por relaciones de afecto. Esto parece atendible, particularmente desde la perspectiva del perfil delictual de los sujetos u organizaciones que están detrás de esta clase de hechos; sin embargo, su uso debe ser excepcional y su testimonio sólo podrá tener validez probatoria de manera restringida, toda vez que constituye una morigeración del principio contradictorio.*

Por ello, y haciendo eco de las aprehensiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín Catrimán y otros versus Estado de Chile, debemos establecer estas normas especiales en materia de protección de testigos; pero en caso alguno las condenas por delito terrorista pueden basarse única y exclusivamente en la declaración de uno o más testigos cuya identidad se desconoce.

-Puesto en votación el numeral 2) fue aprobado por idéntica votación.

3) Incorporación de técnicas investigativas utilizadas en la ley N° 20.000. *La ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas hace uso de una serie de herramientas investigativas de gran valor, para dejar en evidencia organizaciones criminales; particularmente, los “agentes encubiertos” e “informantes”. Es inaceptable que la Fiscalía cuente con más herramientas para desbaratar una red de micro traficantes que para combatir el terrorismo. Esto no sólo parece insensato, sino también no responde a la necesidad del Estado de Chile de*

dar cumplimiento a los compromisos internacionales en cuanto a adecuar su legislación en el combate del terrorismo y del crimen organizado.

Algo similar podría afirmarse respecto de las entregas controladas, que si bien son más propias del combate al narcotráfico, podrían resultar de significación a propósito de transacciones de elementos destinados a perpetrar atentados.

-Puesto en votación el numeral 3) fue aprobado por mayoría (5x2); votaron a favor los diputados señores Berger, Meza, Rathgeb, Tuma y Urrutia, don Ignacio; mientras que lo hicieron en contra los diputados Carmona y Pacheco, doña Clemira.

4) Impulsar los mensajes presidenciales y las mociones que recogen los puntos anteriores. *Los puntos antes señalados se encuentran recogidos en los boletines 10460-25 (Fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad) y 9692-07 (Determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal). Este último fue producto del trabajo de una comisión de expertos –ingresó a trámite el 4 de noviembre de 2014- y tuvo gran repercusión mediática en la época; sin embargo, aún se encuentra en primer trámite constitucional, en el Senado.*

-Puesto en votación el numeral 4) fue aprobado por idéntica votación.

ii. Sistema de Inteligencia.

Una de las grandes falencias detectadas dice relación con la incapacidad de anticiparse a la comisión de los hechos y de desbaratar las redes criminales que podrían estar detrás de atentados, como por ejemplo la quema de iglesias en los últimos meses. Debemos actualizar nuestros estándares en materia de inteligencia, para lo cual se deben implementar cambios en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y en la coordinación de este organismo con otros servicios.

1) Fortalecer la capacidad operativa de la Agencia Nacional de Inteligencia. *Debemos fortalecer la capacidad operativa de la ANI, mediante un aumento de recursos, de manera que efectivamente pueda cumplir con los fines para los cuales fue creada. La incorporación de nuevas tecnologías, la ampliación de la capacidad operativa y la profesionalización de sus integrantes, son los únicos fines a los que se deberían enfocar los esfuerzos.*

-Puesto en votación el punto ii y su numeral 1) fueron aprobados por mayoría (6x1); votaron a favor los diputados señores Berger, Carmona, Meza, Rathgeb, Tuma y Urrutia, don Ignacio; mientras que lo hizo en contra la diputada Pacheco, doña Clemira.

2) Coordinación del sistema de inteligencia. Quizás el mayor déficit de la ANI, y en ello concuerdan los testimonios recogidos en esta investigación, dice relación con la coordinación que existe entre este servicio y las agencias pertenecientes a las policías y a las Fuerzas Armadas. Por ello, para proveer de información de calidad a los tomadores de decisiones, resultaría conveniente disponer en la ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia, una instancia de coordinación periódica –con carácter mensual– de los directores de cada servicio.

Asimismo, quienes participan del Sistema Nacional de Inteligencia, han señalado como uno de los principales obstáculos para la eficiencia del mismo, el celo con el cual los organismos de inteligencia tratan la información obtenida. Para neutralizar eventuales amenazas, es fundamental que los actores del sistema pongan a disposición del colectivo cualquier información de relevancia. En este punto, sería conveniente disponer sanciones administrativas o incluso penales para quienes retengan información de relevancia para el cumplimiento de los fines propios del Sistema Nacional de Inteligencia.

-Puesto en votación el numeral 2) fue aprobado por mayoría (5x1+2); votaron a favor los diputados señores Berger, Meza, Rathgeb, Tuma y Urrutia, don Ignacio; mientras que lo hizo en contra la diputada Pacheco, doña Clemira. Se abstuvieron los señores Carmona y Chahin.

3) Incorporación de la información obtenida por ANI en los procesos judiciales. Tratándose de delitos donde lo que está en peligro es la seguridad del Estado, debería permitirse la incorporación en el proceso de medios de prueba obtenidos por las agencias de inteligencia; sin perjuicio que el juez estime que, en definitiva, es improcedente por cuanto se vulneran garantías del imputado.

-Puesto en votación el numeral 3) fue aprobado por mayoría (5x2+1); votaron a favor los diputados señores, Meza, Rathgeb, Tuma y Urrutia, don Ignacio; mientras que lo hicieron en contra los diputados Carmona y Pacheco, doña Clemira. Se abstuvo el señor Chahin.

iii. Competencia judicial.

Las denuncias conocidas en los últimos días respecto de jueces objeto de medidas de presión y hostilización, imponen el deber de estudiar mecanismos que permitan alterar las normas generales de competencia relativa, tratándose de causas de especial complejidad, de manera de sustanciar procesos de esta naturaleza fuera del territorio jurisdiccional donde han tenido lugar; replicando fórmulas similares que ya han sido utilizada en países como España. Esta idea se encuentra recogida en el boletín 10460-25, aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y próxima a ser votada en la Sala.

-Puesto en votación el punto iii fue aprobado por mayoría (7x1); votaron a favor los diputados señores Berger, Carmona, Chahin, Meza, Rathgeb, Tuma y Urrutia, don Ignacio; mientras que lo hizo en contra la diputada Pacheco, doña Clemira.

El desarrollo en extenso del debate se encuentra en el archivo de audio digital, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 256 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

- Se levanta la sesión a las 20:00 horas

SERGIO MALAGAMBA STIGLICH,
Secretario de la Comisión.